

# La negociación sobre las bases norteamericanas en España

**Danilo TRELLES, corresponsal**

MADRID, 10. de enero. — La reapertura de las negociaciones sobre las nuevas condiciones que deben regir la existencia de las bases norteamericanas en territorio español, han entrado aparentemente en una etapa conflictiva. Tal parecería sugerirlo las declaraciones que acaba de realizar en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernández Ordoñez, en el sentido de que el gobierno que preside Felipe González desea cumplir las disposiciones del referéndum en el que se decidió la permanencia en la OTAN bajo la promesa de reducir los efectivos norteamericanos, y sus instalaciones a lo que ha replicado el secretario de Estado de aquel país, George Shultz, afirmando que en las nuevas condiciones Washington "podría no estar interesado en mantener su presencia en territorio español".

España tiene un plazo hasta noviembre del año próximo para denunciar el convenio, lo que evitaría su renovación automática. En caso de no llegarse a un acuerdo Estados Unidos debería comenzar a dismantelar sus bases en territorio español en mayo de 1988, fecha en que expira el actual convenio.

El gobierno norteamericano pretende, como condición previa para acceder a las exigencias españolas, que sus fuerzas armadas asuman no sólo las misiones que ellos cumplen ahora por necesidades estratégicas de la organización Atlántica, sino además las que realizan en el cuadro de sus propias operaciones. La situación se ha tornado aún más difícil luego de las polémicas declaraciones de Caspar Weinberger en el sentido de que las fuerzas norteamericanas estacionadas en España, eran fuerzas de la OTAN. Pese a la irritada respuesta oficial española, la confusión deriva de hechos consumados impuestos por la política estratégica norteamericana, que nadie hasta ahora se había preocupado en aclarar. No es un hecho nuevo por cierto, el que los norteamericanos acudan al pretexto de justificar acciones propias, echando mano de supuestas necesidades militares de la OTAN, así como que esta haya permitido siempre que este juego se consumase.

Las funciones de las bases norteamericanas radicadas en España, han estado dictadas por la doctrina política estratégica elaborada por el Pentágono y su evolución ha sido paralela al desarrollo de los medios técnicos militares de que aquellos disponían. Concebida en sus inicios para completar el cerco de amenazas de bombardeos nucleares contra la URSS, fue cambiando su destino con la aparición de los reactores del largo alcance que hacían innecesario el estacionamiento de estos bombarderos en España. Creció entonces la significación de la base de Rota, habilitada para submarinos nucleares, con misiles de largo alcance por lo que esta tuvo una importancia excepcional en la década de los setenta. Pero a partir de entonces su papel se redujo y las bases han pasado a jugar como apoyo logístico de las operaciones norteamericanas. Lo demuestra el rol que jugaron reabasteciendo mediante aviones nodrizas y el tráfico aéreo organizado durante la guerra del Yom Kipur en 1973 y el que proporcionaron a los F-111 que atacaron Trípoli en el curso de este año.

Aparte de esto, las bases han servido para integrar a España en el esquema estratégico occidental durante todo el periodo en que ésta se mantuvo al margen de la OTAN.

Por mucho que les pese a los españoles han si-

do siempre los norteamericanos quienes han marcado el tono de la relación sobre las bases. En la última redacción del tratado actualmente vigente, firmado por los socialistas apenas llegaron al poder en 1982, estos introdujeron apenas unos cambios de palabras por las que se modificó la rotunda prohibición de armas nucleares que existía en el convenio anterior, por una sutil supeditación de esa facultad a la decisión del gobierno, lo que pudo interpretarse como una flexibilización de la posición española.

La reacción europea frente a las declaraciones del ministro de asuntos exteriores de España, ha sido un tanto alarmista. Los países de la OTAN son sensibles a cualquier manifestación de Estados Unidos en el sentido de marcar distancias con sus aliados europeos y aunque no se trate más que de una amenaza, las manifestaciones de George Shultz han creado cierto nerviosismo. En ese cuadro se insertan las declaraciones del canciller alemán Kohl durante su visita a Madrid en las que sugirió sin ninguna diplomacia la necesidad de mostrarse más dócil en las negociaciones con Estados Unidos.

La reacción de los partidos políticos españoles frente al aparente conflicto provocado por las declaraciones de su ministro de asuntos externos se encuadran en los parámetros ya conocidos.

Alianza Popular, a través de su coordinador Robles Piquer, ha advertido sobre el riesgo de que los norteamericanos opten por reforzar su presencia en otros países de la zona, como Marruecos o Portugal.

El Partido Demócrata Popular, que liderea Oscar Alzaga criticó los extremismos verbales y aunque no cuestiona la posición de fondo asumida por Fernández Ordoñez, señalaron que no se debe "contribuir a alimentar determinados sentimientos primarios antinorteamericanos".

El Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez realizó declaraciones en el sentido de "que han defendido siempre que una vez refrendada nuestra integración en una alianza multilateral como la OTAN, no tiene sentido el mantenimiento del tratado bilateral de defensa con los norteamericanos, que se corresponde con situaciones muy distintas de la actual y que implica de hecho que España forma parte del dispositivo estratégico norteamericano, lo que nos puede llevar a situaciones confusas y delicadas, como ocurriera la pasada primavera con las acciones norteamericanas en el Mediterráneo".

Los comunistas que, por su parte, también defienden la denuncia del tratado bilateral, afirman que "la respuesta arrogante de Shultz es una consecuencia de la actitud sumisa que el gobierno de Felipe González ha venido asumiendo ante Reagan y su política".

A nuestro entender se está exagerando la significación de un episodio en el que se repiten reglas de una convención en que los intérpretes conocen bien su juego. El gobierno de Felipe González intenta, una vez más, dejar la impresión de que negocia con los norteamericanos desde posiciones de principio, cuando los hechos demuestran que su visión armoniza perfectamente con la óptica atlantista de la derecha. A partir de ahí, no resulta difícil vaticinar una feliz culminación de los acuerdos que rigen el tratado bilateral, con lo que las bases que interesen a los norteamericanos, seguirán enclavadas en el territorio español.